

Doce millones de personas estudian, trabajan o residen en un Estado miembro del que no son nacionales. Cuando estas personas y empresas ejercen su libertad de circulación o las libertades del mercado interior, por ejemplo optando por residir o desempeñar su actividad económica en otro Estado miembro, se enfrentan a una serie de dificultades y gastos a la hora de presentar ciertos documentos públicos que ese Estado les requiere, así como de conseguir que les sean aceptados.

LORENZO PRATS ALBENTOSA, catedrático de Derecho Civil. UAB

La libre circulación de documentos públicos

A estas dificultades se añade que, en no pocas ocasiones, en ese otro Estado se sigue con los no nacionales unos procedimientos y métodos diferentes a los previstos, para el mismo objeto, para sus nacionales.

Entre tales trámites se encuentran la exigencia de la legalización de la firma o la incorporación al documento de la apostilla, o la certificación de las copias, o la exigencia de traducciones juradas. Su función común es dar fe, ante las autoridades del Estado de destino, de que los documentos públicos exigidos son plenamente legales en su país de ori-

gen. De su demostración dependerá que sean aceptados y admitidos en el Estado receptor, y, de serlo, que este les permita que puedan tener acceso a un derecho, recibir un servicio o cumplir con una obligación.

No obstante, estos trámites, en no pocas ocasiones, pueden considerarse desproporcionados, pues a pesar de que con ellos se persigue demostrar su autenticidad, y garantizar ciertas cotas de seguridad jurídica, sin embargo ponen de manifiesto una desconfianza impropia entre países que forman parte de la Unión y además, respecto de documentos públicos que son plena-

mente eficaces en el país de origen. Son, por tanto, resabios propios de los Estados nación, que no solo son incompatibles con las finalidades que pretende alcanzar la Unión Europea, sino que, materialmente, están entorpeciendo la construcción de la Europa de los ciudadanos, pues, además, son causa de discriminación indirecta de los nacionales de los Estados miembros emittentes de los documentos públicos, con respecto a los nacionales de los Estados de presentación o destino de tales documentos.

Todos estos motivos y razones –en buena medida ya identificados

in
ENGLISH

The free movement of public instruments

Twelve million people study, work or live in a Member State of which they are not nationals. When these people exercise their freedom of movement or the freedoms of the internal market, for example by choosing to live or perform their economic activity in another Member State, they face a series of difficulties and expenses in presenting certain public instruments that the State in question demands of them, and likewise in having them accepted.

These difficulties are often exacerbated by the fact that in the other State procedures and methods are adopted for non-nationals that are different from those established for the same purpose for their own nationals.

Such procedures include the demand for the legalisation of signatures or the addition of an apostille to the instrument, certification of copies, or the demand for sworn translations. The function common to such procedures is to provide confirmation before the authorities of the destination State that the public instruments

demand are fully legal in the country of origin. Demonstration of this will be decisive for them to be accepted and admitted in the recipient State, and if they are, will likewise provide legal access, receipt of a service or fulfilment of an obligation.

However, such procedures may often be seen as disproportionate, since although their aim is to demonstrate authenticity, and guarantee certain levels of legal certainty, they nonetheless reveal an inappropriate mistrust among countries belonging to the Union, and furthermore with regard to



Este Reglamento persigue facilitar la libre circulación de ciudadanos simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la UE

en el Programa *Estocolmo 2009. Una Europa abierta y segura que proteja al ciudadano*– se encuentran en la base de la propuesta de Reglamento por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012, que evidentemente pretende ser una pieza relevante en la construcción de la “Europa de los ciudadanos”, y, por tanto, del concepto de ciudadanía europea. Y ello pues sus disposiciones persiguen incrementar sus derechos y li-

public instruments that are fully effective in the country of origin. They are, then, vices typical of nation States that are not only incompatible with the purposes that the European Union aims to achieve, but are tangibly hampering the construction of a Europe of Citizens, since they furthermore give rise to indirect discrimination against nationals of the Member States issuing the public instruments, compared with the nationals of those States where the documents are presented or have their destination.

All these grounds and reasons, to a great extent

«This Regulation will facilitate the movement of citizens by simplifying the acceptance of certain public instruments in other countries of the EU»

already identified in the 2009 Stockholm Programme An open and secure Europe serving and protecting citizens, provide the foundation for the proposed Regulation to facilitate the freedom of movement of citizens, simplifying the acceptance of certain public instruments in the European Union, and modifying Regulation (EU) No. 1024/2012, and clearly aiming to play a key role in the construction of the "Europe of Citizens", and hence the concept of European citizenship. This is because its provisions aim to increase rights and freedoms, in particular and in

this case, the movement of people and economic trade between companies and individuals.

A single area of Justice.

Meanwhile, at the heart of the proposal there lies not only said concept, but also another and no lesser purpose, namely the creation of an area of Justice. The proper functioning of this is fundamental for the construction of the single market, and inevitable importance must therefore be given to the replacement of the aforementioned procedures with other more effective, secure and straightforward methods that

bertades, en particular, y en este caso, la de circulación de personas y el tráfico económico entre empresas y personas.

Un espacio único de Justicia.

Pero en el corazón de la propuesta no solo se encuentra tal concepto, también se encuentra otro propósito, de rango no inferior, como es la creación de un espacio de Justicia. Pues su correcto funcionamiento es fundamental para la construcción del mercado único, para lo que tiene una inevitable importancia la sustitución de los referidos trámites por otros medios más eficaces, seguros y simples, que, además, reforzarán la confianza en los documentos públicos expedidos por las autoridades de los Estados miembros de origen en los de destino y, sobre todo, consolidarán un principio clave en la construcción del espacio europeo de Justicia, como es el principio de confianza mutua. Principio determinante, además, para promover una cooperación más estrecha entre Estados miembros dentro del mercado único, y respecto de determinadas cuestio-

Objetivos del Reglamento

Esta propuesta de Reglamento pretende, en primer lugar, reducir las dificultades prácticas provocadas por los trámites administrativos referidos, y, en concreto, recortar las formalidades burocráticas, los costes y las demoras, y, en particular, suprimir los requisitos de legalización y la apostilla, así como simplificar el uso de las copias y las traducciones. En segundo lugar, reducir los costes de traducción relacionados con la libertad de circulación de documentos públicos dentro de la UE. En tercer lugar, simplificar el fragmentado marco jurídico que regula la circulación de documentos públicos entre Estados miembros. En cuarto lugar, asegurar un nivel más eficaz de detección del fraude y la falsificación de documentos públicos. Y, por último, eliminar todo riesgo de discriminación entre ciudadanos de la UE.

nes clave para su construcción, como son una prevención más eficaz del fraude y de la falsificación de tales documentos públicos.

Ha de señalarse, además, cómo esta propuesta se construye sobre ciertos principios horizontales referidos al uso y la aceptación de los referidos documentos públicos entre Estados miembros sin necesidad de la Apostilla o trámites equivalentes. En aplicación de tales principios, la propuesta de Reglamento complementa el Derecho sectorial de la Unión vigente en este ámbito, pues se advierte que existen defectos de regulación en el Derecho de la UE, y, además, respalda aquellas iniciativas de esta dirigidas a simplificar la vida de los ciudadanos, así como las condiciones de actividad de los operadores económicos.

Como se ha señalado anteriormente, la propuesta promueve el principio de confianza mutua entre autoridades de los Estados miembros dado que mejora el conocimiento por ellos de los documentos públicos, y crea un mecanismo de cooperación administrativa entre

in
ENGLISH

will furthermore reinforce trust in the public instruments issued by the authorities of the source and destination Member States, and above all will consolidate a key principle in the construction of a European area of Justice, namely the principle of mutual trust. This is furthermore a decisive principle in promoting closer cooperation among Member States within the single market, and with regard to certain key issues for the construction of this, such as more effective prevention of fraud and of the counterfeiting of such public documents.

Objectives of the Regulation

This proposed Regulation aims, firstly, to reduce the practical difficulties caused by the aforementioned administrative procedures, and specifically to cut bureaucratic formalities, costs and delays, and in particular, to eliminate requirements for legalisation and apostilles, and to simplify the use of copies and translations. Secondly, to reduce the translation costs connected with the freedom of movement of public instruments within the EU. Thirdly, to simplify the fragmented legal framework governing the movement of public instruments among Member States. Fourthly, to guarantee a more effective level in the detection of fraud and of the counterfeiting of public instruments. And lastly, to eliminate any risk of discrimination among citizens of the EU.

It should also be specified that this proposal would be built on certain horizontal principles regarding the usage and acceptance of the aforementioned public instruments among Member

States without the need for an apostille or equivalent procedures. In applying such principles, the proposed Regulation supplements the current sectoral Law of the Union in this regard, noting

that there are regulatory defects in EU Law, while furthermore supporting EU initiatives intended to simplify the life of citizens, and the conditions under which economic operators function.

As indicated above, the proposal promotes the principle of mutual trust among the authorities of Member States, as it improves their understanding of public instruments, and creates a mechanism for administrative cooperation among authorities, based on the Internal Market Information System, introduced by Regulation 1024/2012, one of the



autoridades, que se basa en el Sistema de Información del Mercado Interior, instaurado por el Reglamento 1024/2012, que tiene como una de sus funcionalidades el mantenimiento de un repositorio de modelos de documentos públicos utilizados en el mercado interior que, según se refiere en la propuesta, puede servir para construir la primera etapa para la comprobación de los “documentos inusuales”.

Con mayor detalle, puede señalarse que el Reglamento tiene por objeto simplificar los procedimientos para la presentación transfronteriza de los documentos públicos expedidos por los países de la UE, con valor probatorio formal, sobre

La sustitución de estos trámites por otros medios más eficaces, seguros y simples, reforzará la confianza en los documentos públicos

aspectos relativos al estado civil, como el nacimiento, el nombre, la defunción, el matrimonio y las parejas de hecho registradas, la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio, la filiación, la adopción, el

domicilio, la residencia, la nacionalidad y los documentos que certifiquen la ausencia de antecedentes penales. Asimismo, comprende los documentos públicos que se pueden requerir a los ciudadanos de la UE cuando deseen votar o presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo o en las elecciones municipales.

La propuesta concentra su eficacia en la determinación de la autenticidad de los documentos públicos. Por lo que no aborda la cuestión del reconocimiento de los efectos de los documentos públicos entre Estados miembros, ni introduce la plena armonización de todos los documentos públicos existentes en los Estados ni de los supuestos en los que los ciudadanos y las empresas de la UE precisan esos documentos en situaciones transfronterizas.

A fin de cumplir con tal objetivo, la propuesta de Reglamento establece unos impresos estándar multilingües, relativos al nacimiento, la defunción, el matrimonio y la unión registrada. Estos impresos se adjuntarán a los documentos públicos

«The replacement of these procedures with other, more effective, secure and straightforward methods, will reinforce trust in public instruments»

functionalities of which is the maintenance of a repository of templates of public instruments used within the internal market that, as mentioned in the proposal, can serve to build the first stage for the confirmation of "unusual instruments".

It may in greater detail be indicated that the Regulation will have the aim of simplifying procedures for cross-border presentation of public instruments issued by EU countries, with formal evidentiary value, concerning aspects regarding civil status, such as birth, name, death, marriage, parentage, legal

separation, divorce or marriage annulment, adoption, residency and domicile, nationality, instruments certifying the absence of a criminal record. It likewise covers public instruments that may be demanded of EU citizens if they wish to vote or stand as candidates in European Parliament or municipal elections.

The proposal focuses its efficacy on the determination of the authenticity of public instruments. It therefore does not address the issue of the recognition of the effects of the public instruments among Member

States, nor does it incorporate the full harmonisation of all public instruments existing in the States, nor circumstances in which the citizens and companies of the EU require such instruments in cross-border situations.

So as to fulfil this aim, the proposed Regulation establishes standard, multilingual forms for birth, death, marriage, registered. These will be attached to the public instruments of the Member States. And the issuance thereof will be voluntary, at the request of the party concerned. Nonetheless, if they are used they will have legal

de los Estados miembros. Su expedición será voluntaria y a petición de persona interesada. No obstante, de utilizarse tendrán efectos jurídicos respecto del reconocimiento sobre su contenido en los Estados en los que se presenten, pues con ellos tan solo se pretende reducir los requisitos de traducción a cargo de los ciudadanos y empresas.

La intervención notarial. Sin duda, la vía que esta propuesta de Reglamento abre se apoya en un sustrato de enorme importancia, que ha sido construido durante largo tiempo y que tiene por base un elemento común de la Europa continental, y que conforma uno de los elementos característicos de los Estados que la integran: la intervención notarial y su práctica.

En concreto, veintidós Estados miembros de la Unión contemplan en sus ordenamientos jurídicos un sistema de fe pública documentada, y atribuyen su competencia y función a un notario, que tiene, por tanto, el carácter de funcionario público. Además, los Notariados de tales Estados se encuentran aso-

Esta propuesta se apoya en un sustrato que tiene por base un elemento común de la Europa continental: la intervención notarial y su práctica

ciados en el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE), con competencias para representarlos ante las Instituciones europeas, pero que, además, se constituye en centro de encuentro y debate entre ellos referido al Derecho privado de los Estados miembros, su aplicación y evolución, así como de intercambio de buenas prácticas notariales, dirigido a la mejora, perfección y, sobre todo, modernización de la función notarial y su regulación tanto en sus países como en el seno de la Unión.

Es, por tanto, un foro muy relevante, pues desde él se contribuye

activamente a la construcción del espacio europeo de Justicia, seguridad y libertad, así como a la mejora de la prestación del servicio público notarial, y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos eu-

effects regarding the recognition of their content in the States where they are presented, since their aim is simply to reduce the translation requirements imposed on citizens and companies.

Notarial intervention

However, the channel opened up by this proposed Regulation is supported by a foundation of huge importance, that has been built up over a considerable period, and is based on an element common to continental Europe, comprising one of the characteristic elements of its constituent States:

notarial intervention and practice.

In specific terms, twenty-two Member States of the Union provide in their legal structures for a system of documented public record, the corresponding competency and function being entrusted to a notary, who therefore acquires the status of public functionary. Meanwhile, the Notariats of said States are the associate members of the CNUE (Council of the Notariats of the European Union), with competencies to represent them before the European institutions, but furthermore comprising

«The proposal is supported by a foundation based on an element common to continental Europe: notarial intervention and practice»

a platform for contact and debate among them as regards Private Law of the Member States, its application and evolution, and the exchange of notarial good practice, intended to improve, perfect and, above all, modernise the notarial function and its regulation both in the countries themselves and at the heart of the Union.

This is therefore a particularly relevant forum, since it actively contributes to the construction of the European area of justice, security and freedom, along with the improved provision of the public notarial service, and the satisfaction



ropeos. Necesidades que son crecientes, por la decidida y constante construcción de la Unión, que comporta el fortalecimiento del ejercicio de sus libertades fundamentales, destacadamente, la de circulación

El proyecto EUfides

EUfides facilita la compra transfronteriza de bienes inmuebles, sin necesidad de que las partes se encuentren presentes en el mismo lugar (inmediatividad física), pues basta que cada una de ellas esté en una notaría de un Notariado incorporado a este Proyecto (inmediatividad virtual), y de distinto país, para activar la cooperación notarial. En virtud de esta cooperación los notarios se comunican entre sí, y se intercambian la información jurídica precisa, referida al acto de venta del inmueble; información que trasladarán a sus respectivos clientes, a fin de resolverles todas aquellas dudas que se les planteen durante el proceso de compra, y a fin de que conozcan aquellos trámites administrativos exigidos por el Estado del lugar del inmueble relacionados con la venta, así como aquellos deberes fiscales que deberán cumplir. En un momento posterior, una vez informado suficientemente el consentimiento de las partes, se produce el intercambio electrónico de las propuestas de contrato y, finalmente, del documento público, intervenido por ambos notarios. Desde luego, durante este procedimiento, las partes, mediante sus notarios, pueden cumplir con todos aquellos trámites exigidos por las autoridades del país en que se encuentre el inmueble, incluso para la presentación en el registro inmobiliario y, en su caso, en el Catastro

de personas, la conformación de la ciudadanía europea y su status, así como la creación de un verdadero mercado único. Pero no solo, pues la movilidad global de personas y empresas hace precisa, asimismo, la seguridad jurídica que ofrece tanto la intervención notarial de un acto o documento público, como la red mundial de confianza tejida desde la Unión Internacional del Notariado

entre 86 países del mundo, cuyos notariados forman parte de ella. Esta red de confianza y de seguridad notarial, unida a la elevada calidad de los medios tecnológicos implementados por el Notariado en redes seguras de interconexión y encriptación, son antecedente necesario y clave para la aplicación de la propuesta de Reglamento objeto de este estudio. ●

of the needs of European citizens. Needs that are on the increase, given the decided and constant construction of the Union, which entails the strengthening of the exercise of its fundamental freedoms, most notably the movement of people, the shaping of European citizenship and its status, and the creation of a true single market. Not only this, though, since the global mobility of people and companies furthermore demands the legal certainty offered both by the notarial intervention of a public

The EUfides project

This EUfides facilitates cross-border purchases of real estate properties, without the need for the parties to be present in the same location (physical immediacy), since it is sufficient that each of them should be at a notary office of a Notariat belonging to the Project (virtual immediacy), and of a different country, in order to activate notarial cooperation. By virtue of this cooperation, the notaries communicate with one another and exchange the required legal information as regards the act of sale of the property, information that they will pass on to their respective clients, in order to settle any queries that they might raise during the purchase process, and so as to explain to them the administrative procedures demanded by the State where the property is located as regards sale, in addition to the taxation duties that they will be required to fulfil. At a subsequent stage, once the parties have achieved sufficiently informed consent, the electronic exchange of contractual proposals occurs, followed lastly by a public instrument, witnessed by both notaries. During this procedure, of course, the parties may, via their notaries, comply with all procedures demanded by the authorities of the country where the property is located, including for presentation at the land register and, where applicable, the land survey

instrument or deed, and the global network of trust woven by the International Union of Notaries among 86 countries around world whose notariats are members. This network of notarial certainty and trust, combined with the high quality of the technological resources implemented by the Notariat in secure interconnection and encryption networks, are the necessary and vital precursor in order to apply the proposed Regulation forming the object of this study.





PEDRO CARRIÓN, NOTARIO

Veremos si el proyecto ve la luz. El fin es loable

La Unión Europea sigue siendo una unión entre Estados soberanos, que conservan su autonomía en lo que concierne a las leyes que cada uno aprueba, a los procedimientos que regula y a los documentos que exige, diferentes a menudo de los de los otros Estados miembros, a veces por cuestiones simplemente culturales o de tradición jurídica más que por verdaderas razones de fondo.

No obstante, esta situación está cambiando, y es lógico que lo haga, si realmente se quiere construir la ansiada Europa del Derecho, en la que sus ciudadanos y empresas puedan desenvolverse con facilidad, a la par que con seguridad jurídica, más allá de las fronteras del Estado miembro en el que tienen su residencia habitual o su domicilio social.

Pensemos en una persona que necesita acreditar en otro Estado que no es el suyo, cuál es su edad, cuál su estado civil o su relación de pareja, su régimen matrimonial, o que no tiene antecedentes penales, o que cierta persona

ha fallecido. ¿Qué documentos debe presentar, los del Estado miembro de donde procede o los del Estado miembro donde necesita actuar? Hasta ahora, es evidente que la respuesta ha sido la segunda. Cada Estado ha solicitado y aceptado los documentos que su legislación exige, y ha rechazado o desconocido, o, al menos, dificultado el uso de los que le han presentado originados más allá de sus fronteras nacionales. Esto ha dificultado sobremedida la circulación de personas y empresas, ha desincentivado esos desplazamientos y el emprender nuevas actividades y negocios; también el coste que ha supuesto saber los documentos que se necesitaban y cómo conseguirlos.

La UE es consciente de esta realidad. Por ello ha querido adoptar medidas para evitar o, al menos, paliar estas dificultades. De ahí que esté en trámites la aprobación de un proyecto de reglamento europeo que aspira a que ciertos documentos, suficientes en un Estado miembro para acreditar una determinada situación, hecho o acto

in
ENGLISH

We will see
if the draft sees
the light of day.
The purpose
is laudable

Pedro Carrión, Notary

The European Union continues to be a union of sovereign States which retain their autonomy with respect to the laws that each one passes, the procedures they regulate and the documents they demand, which are frequently different to those of the other Member States. Sometimes this is simply due to cultural matters or legal tradition, rather than any other truly fundamental reasons.

Nevertheless, this situation is changing and it is logical that it does so if it is truly desired to build the long awaited Europe of Rights where its citizens and businesses can function easily while at the same time having legal certainty outside the borders of the Member State where they habitually reside or have their registered office.

For example, think about a person who needs to prove his/her age, marital or partnership status or marital regime, or that he/she has no criminal record or that a certain person has died in a State other than his/her own. What documents should they submit? Those of the Member State they come from, or the Member State where they need to act? Up until now, it is

They must be
public
documents
which inspire
real, genuine
confidence

evident that the answer has been the second option. Each State requests and accepts the documents that its legislation demands and has rejected or refused to recognise or, at the very least, made it very difficult to use those submitted which come from a different State. This has made the free flow of people and businesses exceedingly difficult, it has discouraged movement and embarking on new activities and businesses. There is also the cost involved in knowing which documents are needed and how to get them.

The EU is aware of this reality. That is why it has wanted to take steps to prevent, or at least alleviate, these difficulties. Therefore it is in the process of approving

jurídico, sean también aceptados, al menos, en los otros Estados miembros.

Pero el reconocimiento, o la aceptación, no pueden predicarse sin más de cualquier documento. Han de ser documentos públicos que inspiren una verdadera y auténtica confianza, que gocen de credibilidad por sí solos en el Estado miembro de origen y que tengan que ser utilizados en otro Estado miembro.

Han de ser documentos públicos que inspiren una verdadera y auténtica confianza

Quedan, pues, excluidos del proyecto los documentos privados, los públicos con origen en Estados terceros no miembros de la UE, los públicos que, aunque procedan de un Estado

miembro, hayan de ser presentados ante las autoridades de un Estado tercero, y los públicos con origen en un Estado miembro pero cuyo destinatario no sea otra autoridad pública de un Estado miembro sino, por ejemplo, otros particulares o entidades financieras o sociedades o empresas, que deberán decidir libremente el trato que les dispensan.

Según el proyecto de reglamento debería presentarse el original del documento público o, si no es posible, una copia certificada conforme; es decir, lo que entendemos por una copia auténtica.

Naturalmente no deberían suscitarse dudas en cuanto a su autenticidad —es decir, sobre la firma, la condición de autoridad de quien lo firma o sobre el sello o timbre que debe llevar—. Hay previsto un sistema de consultas a través del IMI para solventar las dudas que pudieran suscitarse.

Para evitar o reducir costes, se aboga también por no considerar imprescindible la traducción. Como alternativa se dispondría de modelos oficiales multilingües que harían innecesaria aquella. Y, en esa misma línea, se dispensaría a tales documentos de tener que ser apostillados, en su caso, legalizados, no ignorando los problemas de falta de seguridad que ello podría reportar.

Por el momento, este reglamento solo sería aplicable a documentos públicos acreditativos de ciertas situaciones o hechos que afectan al estado civil de una persona o que son publicados en un registro civil. Nada impide pensar que pudiera extenderse el ámbito de aplicación del reglamento a otra información publicada en registros públicos u oficiales, siempre que la misma mereciese ser digna de confianza, pues el recelo de muchos países deriva de la dejación con que en algunos de ellos se obtiene la información que esos registros, también el civil, publican.

Veremos si el proyecto ve la luz. El fin es loable, y por ello, aunque la tarea no es fácil y son grandes los recelos y la desconfianza entre los Estados miembros, no dudo de que aquel se acabará imponiendo.

a draft European regulation the aim of which is for certain documents, which are sufficient in a Member State to prove a specific situation, fact or legal act, to also be accepted, at the very least, in the other Member States.

However recognition, or acceptance, cannot be given to just any document. They must be public documents which inspire real, genuine confidence, which are credible on their own in the Member State of origin and which have to be used in another Member State.

Therefore, private documents, public documents originating in States which are not members of the EU, public documents which, although they come from a Member State, must be submitted to

authorities in a non-EU State and public documents originating in a Member State which are not destined for a public authority in a Member State but instead, for example, for other individuals or financial institutions or companies or businesses, who must freely decide the treatment to be given to them, are excluded from the draft.

According to the draft regulation the original of the public document must be submitted or, if not possible, a certified copy, that is to say, what we understand to be a true copy.

Of course, there must be no room for doubt about its authenticity —that is to say, about the signature, the position of authority of the person signing or about the

seal or stamp that it must carry—. There is a plan for a referral system using the IMI to resolve any queries which may arise.

To avoid or reduce costs, it is advocated that a translation should not be considered essential. As an alternative, there will be official multilingual forms available which make this unnecessary. By the same token, these documents would not need to be apostilled, or legalised, as appropriate, although the problems with lack of security that this could produce are not overlooked.

For the moment, the regulation will only be applicable to public documents proving certain situations or facts that affect the civil status of a person or

which are published on a civil register. There is nothing to prevent us thinking that the regulation's scope of application could be extended to other information published on public or official registers, as long as this is worthy of being considered reliable, as the mistrust of many countries arises from the laxity with which information published by the registries, including the civil registry, is obtained in some of them.

We shall see if the draft sees the light of day. The purpose is laudable and, for this reason, although the task is not an easy one and the misgivings and distrust amongst Member States are great, I have no doubt that it will end up being enforced.

in
ENGLISH